



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
Juzgado 33 Laboral del Circuito de Bogotá D.C.  
Edificio Nemqueteba - Calle 12C No. 7 - 36 Piso10  
[jlato33@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:jlato33@cendoj.ramajudicial.gov.co)

INFORME SECRETARIAL. Bogotá D.C., 10 de diciembre de 2020. En la fecha, pasa al Despacho del Señor Juez la Acción de Tutela de la referencia. Sírvase Proveer.

Once (11) de Diciembre de Dos Mil Veinte (2020).

| ACCIÓN DE TUTELA No. 11001 31 05 033 2020 00 450 00 |   |          |                          |
|---|---|----------|--------------------------|
| ACCIONANTE  | María Estefanía Aragón Rodríguez  | C.C. No. | 1.122.141.615 de Acacias |
| ACCIONADA   | Fiscalía General de la Nación   |          |                          |
| PRETENSIÓN  | Amparar el derecho fundamental de petición y como consecuencia de esto se ordene a la entidad accionada dar respuesta de fondo a la solicitud elevada el 23 de octubre de 2020, mediante la cual se reitera la petición elevada el 4 de agosto de 2020, en el sentido de solicitar información acerca del funcionario CARLOS EDUARDO ARÉVALO RIVERA a fin de actuar en calidad de defensora dentro del proceso disciplinario adelantado por la entidad en contra de éste, conforme a la asignación hecha por el Consultorio Jurídico de la Universidad Libre. |          |                          |

### I. ANTECEDENTES

**MARÍA ESTEFANÍA ARAGÓN RODRÍGUEZ**, actuando en nombre propio y en calidad de estudiante activa del Consultorio Jurídico de la Universidad Libre - Sede Cancelaria, presentó solicitud de tutela contra la **FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN**, invocando la protección de su derecho fundamental de petición, el cual considera vulnerado por cuanto la entidad accionada se ha negado a dar respuesta a la solicitud radicada el 23 de octubre de 2020, mediante la cual se reitera la petición elevada el 4 de agosto de 2020, en el sentido de solicitar información acerca del funcionario CARLOS EDUARDO ARÉVALO RIVERA a fin de actuar en calidad de defensora dentro del proceso disciplinario adelantado por la entidad en contra de éste, conforme a la asignación hecha por el Consultorio Jurídico de la Universidad Libre.

Para fundamentar su solicitud, el accionante relata los siguientes:

#### 1. HECHOS.

- 1.1 El 1 de julio de 2020 a la accionante le fue asignado un caso por parte del Consultorio Jurídico de la Universidad Libre, previa solicitud enviada por la Fiscalía General de la Nación, teniendo a solicitar la designación de un estudiante que funja como defensor del señor Carlos Eduardo Arévalo Rivera en el marco de un proceso disciplinario que la entidad adelantaba en contra de este.
- 1.2 Dado que la Fiscalía no proporcionó datos suficientes del usuario al realizar la solicitud ante el Consultorio, no fue posible generar la respectiva certificación para que la accionante se encargara del proceso. Ante lo anterior, la accionante trató de comunicarse a la extensión y número telefónico indicado por la Fiscalía en la solicitud enviada, sin embargo, no obtuvo respuesta.
- 1.3 El 4 de agosto de 2020 por medio de la página oficial de la Fiscalía, la accionante radicó un derecho de petición diligenciando el formato de PQRS.
- 1.4 El 28 de agosto de 2020 la accionante recibió un correo electrónico en el que requerían que aportara el documento de identidad y poder otorgado a fin de acreditar su condición de representante del funcionario Carlos Eduardo Arévalo Rivera.
- 1.5 El 1 de septiembre de 2020 la accionante recibió un nuevo correo en que se le informaba que el tipo de información requerida no podía ser suministrada.
- 1.6 El 11 de septiembre de 2020, después de haber solicitado a la Universidad la certificación que acreditara su condición de estudiante miembro activo del Consultorio Jurídico, respondió el correo enviado el 28 de agosto, aportando la documentación requerida y solicitando además le informaran si el funcionario ya tenía nuevo apoderado o defensor.
- 1.7 El 18 de septiembre la accionante recibió correo en que el que informan que la solicitud había sido remitida a la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía.



1.8 El 23 de octubre de 2020 la accionante se acercó a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación para solicitar información respecto a su petición, donde en la oficina de correspondencia le sugirieron realizar una nueva petición y la radicara físicamente, pues el sistema no arrojaba ninguna información.

## 2. Intervención de la Entidad Accionada.

Admitida la tutela, de ella se dio traslado a la entidad accionada a fin de que ejerciera su derecho de defensa.

Así pues, mediante respuesta enviada a la dirección de correo electrónico del Despacho, la Fiscalía General de la Nación solicitó se declare la improcedencia de la acción de tutela y como consecuencia se niegue el amparo solicitado al configurarse la carencia actual de objeto por hecho superado.

Para sustentar lo anterior indica que mediante respuesta enviada por correo electrónico a la accionante el pasado 3 de diciembre de 2020 se informó que, verificado el expediente radicado SIREN 24926, el 31 de julio de 2019 se realizó acta de posesión del defensor de oficio Juan Camilo Uribe Fuentes, miembro activo del Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario, así mismo, que el expediente se encuentra culminado con ejecución de la sanción, motivo por el cual no se le realizará una nueva posesión como defensora.

## II. PROBLEMA JURÍDICO.

Entra el Despacho a determinar, si la respuesta de la accionada es suficiente para satisfacer la solicitud de elevada por la accionante el 4 de agosto y 23 de octubre de 2020.

Con lo anterior se procede a resolver, previas las siguientes;

## III. CONSIDERACIONES

Conforme al Art. 86 de la Constitución Política y el Decreto Reglamentario de la Acción de Tutela (Art. 1º. del mencionado Decreto), ésta procede contra la acción u omisión de las autoridades públicas y de los particulares, sobre estos últimos, según lo establece la ley (art. 42 del mismo Decreto) que vulneren o amenacen cualquiera de los derechos constitucionales fundamentales, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Establece por previsión supra legal la concepción de la acción de tutela como un instrumento jurídico que permite brindar a cualquier persona, sin mayores requisitos de orden formal, la protección específica e inmediata de sus Derechos Constitucionales Fundamentales, cuando se ven vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de una autoridad pública o de un particular en los términos que le señale la ley, siempre que para la protección del derecho que busca el amparo de tutela no exista otro mecanismo de defensa judicial para protegerlo, o que existiendo, al ejercitarse la acción se pretenda evitar un perjuicio irremediable, para lo cual su procedencia sería posible como mecanismo transitorio dada su inmediatez para la protección del derecho constitucional violado.

Además, el Decreto 306 de 1.992, por medio del cual se reglamenta el Decreto 2591 referido, establece en su artículo 2º que la acción de tutela protege exclusivamente los derechos constitucionales fundamentales y que no puede ser utilizada para hacer cumplir las leyes, los decretos, los reglamentos o cualquier otra norma de categoría inferior, como así lo tiene interpretado y definido la jurisprudencia reiterada del Alto Tribunal Constitucional.

### 1. Derecho de Petición.

Al respecto, ha manifestado la Honorable Corte Constitucional, que la posibilidad de las autoridades de no contestar reclamaciones o solicitudes conlleva la configuración del



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
Juzgado 33 Laboral del Circuito de Bogotá D.C.  
Edificio Nemqueteba - Calle 12C No. 7 - 36 Piso10  
[jlato33@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:jlato33@cendoj.ramajudicial.gov.co)

fenómeno del silencio administrativo, lo que no puede entenderse como vía expedita para el desconocimiento del núcleo esencial del derecho fundamental de petición.

El derecho de petición es el mecanismo por excelencia que tiene el ciudadano para poner en funcionamiento la administración pública, y obtener una pronta respuesta a los problemas que le aquejan, razón por la cual le corresponde a la administración pública, en desarrollo de la función pública, su resolución.

La Corte en sentencia T - 761 de 2005 con relación al derecho de petición indicó:

*"[...] reiteradamente la Corte Constitucional ha definido los componentes conceptuales básicos y mínimos del derecho de petición, señalando que dicho derecho fundamental comprende la posibilidad efectiva y cierta de elevar peticiones respetuosas ante los diferentes entes del poder público, facultad que está garantizada por la correlativa obligación impuesta a las autoridades de dar trámite a la solicitud, sin que exista argumento alguno para negar su admisión o iniciar las diligencias para dar la respuesta. El destinatario de la petición debe: a- Proferir una respuesta oportuna, dentro de los términos legales establecidos en el ordenamiento jurídico. b- Resolver de fondo lo solicitado, cuestión que exige a la autoridad referirse de manera completa a los asuntos planteados, excluyendo de plano las respuestas evasivas y comunicar prontamente lo decidido al peticionario, independientemente de que la respuesta sea positiva o negativa a sus pretensiones."*

El derecho de petición consagrado en el Artículo 23 de la Constitución Política, ubicado dentro del Título II, Capítulo I, titulado "DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES", es la facultad concedida a las personas para poner en actividad a la autoridad pública o entidades privadas sobre un asunto o situación determinada, y como lo ha precisado el constitucionalista Dr. JACOBO PEREZ ESCOBAR, "[...] El derecho de petición es tan fundamental que sin él serían nugatorios todos los demás. Esto es un derecho que sirve de medio para hacer valer los demás cuando son desconocidos o vulnerados. De ahí su naturaleza especial [...]".

La Ley Estatutaria del Derecho de Petición, Ley 1755 de 2015, establece los términos y parámetros en que deben ser resueltas las peticiones elevadas por los particulares, el artículo 14 de dicha normatividad es claro al establecer:

*"Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:*

*1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.*

*2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.*

*Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto" (Subrayado y negrilla fuera de texto).*

Ahora bien, respecto al deber de notificación de la respuesta que llegue a emitir la administración, la Corte Constitucional en sentencia T-419 de 2013 expresó lo siguiente:



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
Juzgado 33 Laboral del Circuito de Bogotá D.C.  
Edificio Nemqueteba - Calle 12C No. 7 - 36 Piso10  
[jlato33@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:jlato33@cendoj.ramajudicial.gov.co)

*“Cabe recordar que el derecho de petición, se concreta en dos momentos sucesivos, ambos subordinados a la actividad administrativa del servidor que conozca de aquél. En primer lugar, se encuentra la recepción y trámite de la petición, que supone el contacto del ciudadano con la entidad que, en principio, examinará su solicitud y seguidamente, el momento de la respuesta, cuyo significado supera la simple adopción de una decisión para llevarla a conocimiento directo e informado del solicitante.*

4.6. De este segundo momento, emerge para la administración un mandato explícito de notificación, que implica el agotamiento de los medios disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello.

4.6.1. Sobre la obligación y el carácter de la notificación, debe precisarse en primer lugar, **que esta debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el solicitante.**

4.6.2. Esta característica esencial, implica además que la **responsabilidad de la notificación se encuentra en cabeza de la administración, esto es, que el ente al cual se dirige el derecho de petición está en la obligación de velar porque la forma en que se surta aquella sea cierta y seria, de tal manera que logre siempre una constancia de ello.**

La constancia que logre obtener la entidad de la notificación de su respuesta al peticionario, constituye la prueba sobre la comunicación real y efectiva que exige la jurisprudencia para perfeccionar el núcleo esencial del derecho de petición, desde luego, siempre que la respuesta se ajuste a las exigencias que líneas atrás fueron desarrolladas”. (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Ahora bien, como consecuencia de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, fue expedido el Decreto 491 de 2020 por medio del cual se ampliaron los términos para atender las peticiones. En tal sentido, el Art. 5 del mencionado decreto dispuso lo siguiente:

*“Art. 5. Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así:*

*Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.*

*Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:*

*(i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción.*

*(ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción.*

*Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en el presente artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá”.*

#### IV. CASO CONCRETO.

Para el estudio del caso en concreto, indica la parte accionante que la **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN** se ha negado a resolver la petición elevada el 23 de octubre de 2020, mediante la cual se reitera la petición elevada el 4 de agosto de 2020, en el sentido de solicitar información acerca del funcionario CARLOS EDUARDO ARÉVALO RIVERA a fin de actuar en calidad de defensora dentro del proceso disciplinario adelantado por la entidad en contra de éste, conforme a la asignación hecha por el Consultorio Jurídico de la Universidad Libre.



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
**Juzgado 33 Laboral del Circuito de Bogotá D.C.**  
Edificio Nemqueteba - Calle 12C No. 7 - 36 Piso10  
[jlato33@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:jlato33@cendoj.ramajudicial.gov.co)

Si bien al momento de la presentación la acción de tutela no existía prueba que evidenciara que la entidad había dado respuesta a la petición radicada por la accionante el 4 de agosto y el 23 de octubre de 2020, lo cierto es que, verificado el escrito de contestación de la tutela, así como los anexos de esta, se tiene que mediante oficio de respuesta con radicado 20201300010761 del 3 de diciembre de 2020, enviado a la dirección de correo electrónico [estefa\\_aragon@hotmail.com](mailto:estefa_aragon@hotmail.com), se dio respuesta a la petición elevada, en el sentido de indicar que verificado el expediente radicado SIREN 24926, se tiene que el 31 de julio de 2019 se realizó acta de posesión del defensor de oficio Juan Camilo Uribe Fuentes, miembro activo del Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario, y que actualmente el expediente se encuentra culminado con ejecución de la sanción, motivo por el cual no se le realizará una nueva posesión como defensora.

De tal suerte se tiene que con la respuesta dada por la Fiscalía General de la Nación, se ha resuelto el pedimento de la accionante que motivó la acción de tutela, cesando la vulneración del derecho de petición invocada.

En razón y mérito de lo expuesto, el **JUZGADO TREINTA Y TRES LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D. C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y mandato de la Constitución,

**V. RESUELVE**

**PRIMERO:** DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL de objeto por **HECHO SUPERADO**, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO:** NOTIFICAR a las partes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

**TERCERO:** REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, en el evento de no ser impugnado el fallo; de lo contrario, deberá enviarse el expediente al Honorable Tribunal Superior de Bogotá, para que sea sometida a reparto entre los Magistrados de todas y cada una de las Salas que lo conforman.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



**JULIO ALBERTO JARAMILLO ZABALA**  
JUEZ